

PERU 1978 AÑO DE LA AUSTERIDAD*

Josefina MORALES**

[En 1978 [...] nos planteamos que tendríamos un máximo de reducción de 20 000 puestos públicos [...] al 31 de diciembre [...] la reducción de puestos públicos, por renunciadas, supresión de plazas y supresión de vacantes existentes que iban a ser cubiertas, totaliza 30 000 plazas [...]. Por lo tanto, se ha superado la meta en un 50 por ciento.

Ministro de Economía y Finanzas.***

Perú vive una profunda crisis producto de la crisis general del sistema capitalista en su conjunto, así como de su estructura capitalista interna. La crisis de la sociedad peruana es una crisis global, económica, política y social, que se presentó después de un intenso reformismo burgués y pequeñoburgués durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, la llamada «primera fase» del gobierno militar (1968-1975). Este reformismo mostró rápidamente sus limitaciones históricas dentro del contexto de la grave crisis del sistema capitalista en esta década.

Debido a las características de su estructura productiva interna y de su proceso de acumulación “[...] se puede afirmar que no se

trata de una crisis coyuntural sino estructural, no es pues una crisis cíclica igual a la de los países superdesarrollados sino una crisis crónica y permanente por los desequilibrios estructurales de una economía típicamente sojuzgada”.¹

A partir del golpe militar de agosto de 1975 con el que es desplazado Velasco Alvarado y toma la dirección del proceso el general Morales Bermúdez, la crisis, que ya se avizoraba desde el año anterior, se desenvuelve aceleradamente produciendo agudas contradicciones entre los militares, la burguesía local y el capital financiero internacional con respecto a las políticas económicas a seguir para enfrentarla. Es claro que tales políticas coinciden en hacer descansar sobre los trabajadores el peso de la crisis a través de múltiples mecanismos conocidos por los trabajadores latinoamericanos: contención salarial, inflación acelerada, devaluaciones, restricción del gasto público y nueva orientación del mismo, etcétera, con el consecuente crecimiento del desempleo, aumento de la explotación y acelerado descenso del nivel de vida de las masas.

Durante el gobierno de Alvarado se intensificó la participación del Estado en el proceso mismo de acumulación, pasando de una participación del 4% en el PNB en 1971 al 12% en 1975 y un aumento de sus ventas entre 1971-76 del 1 120%.² Otro autor señala, sin embargo, que la participación del Estado en el producto pasó del 13 al 23% de 1968 a 1975.³

Las condiciones objetivas del proceso de acumulación en la fase del capitalismo monopolista de Estado que implican la creciente fusión del Estado y los monopolios en el proceso mismo de acumulación, imponen a muchos estados latinoamericanos algunas de las características estructurales de los últimos tiempos: crecimiento acelerado del presupuesto estatal y su funcionamiento crónico deficitario, inflación galopante, deuda externa e interna explosivamente en aumento; en general, una política económica que beneficia la acumulación monopolista de capital y acorde con los dictados del capital financiero internacional. El Fondo Monetario Internacional interviene en estas políticas de manera decisiva.

Perú no escapa, por supuesto, a esta situación. Al contrario, como país capitalista subdesarrollado se encuentra en relaciones de depen-

* 1978 fue denominado por los militares peruanos en el poder como el Año de la Austeridad.

** Investigadora del IIEC-UNAM.

*** Javier Silva Ruete, ministro de Economía y Finanzas, en su presentación del presupuesto de 1979. *El Comercio*, 12 de enero de 1979, p. 8.

¹ Pedro Castro Suárez, *La crisis de la economía peruana*. Trabajo presentado en agosto de 1978 en el IIEC-UNAM, copia, p. 10.

² Hugo Cabieses y Carlos Otero, *Economía peruana: un ensayo de interpretación*, DESCO, Lima, 1978, p. 92.

³ CIDE, “Perú, el FMI y la situación económica actual”, *Economía de América Latina*, número 1, México, 1978, p. 112.

dencia estructural con los países imperialistas, principalmente con los Estados Unidos. La grave crisis iniciada en 1975 ha llevado a la recesión durante dos años consecutivos; a la constante devaluación de su moneda frente al ya por sí tan devaluado dólar; a graves problemas financieros, «brechas y baches» que llevaron a los militares a renegociar la deuda exterior en situaciones críticas y, principalmente, ha significado una baja acelerada del poder adquisitivo de los trabajadores.

En 1978, particularmente a partir del mes de mayo cuando tomó posesión el actual ministro de Economía y Finanzas y después del paro nacional más importante de los últimos años, el gobierno militar se planteó una política económica dirigida a controlar la inflación, disminuir la recesión, mejorar la balanza comercial, sanear el gasto público, reducir su déficit y la deuda. Los resultados obtenidos son precarios.

La recesión fue del orden de -1.0% del PNB en lugar del -1.2% de 1977; se logró un superávit de la balanza comercial de 200 millones de dólares, primero desde 1974, logro que es probable se haya obtenido más por una disminución de las importaciones que por el aumento del 10% de las exportaciones, ya que el déficit del año anterior fue de 438 millones de dólares. La inflación alcanzó el 73.6% , doblando prácticamente el índice de 1977.

En el aspecto financiero prevalece el déficit crónico del Estado, que ha pasado de 18 144 millones de soles en 1974 a 65 mil millones en 1978 y a 145 578 millones calculados para este año. El presupuesto nacional ha pasado de 131 427 millones de soles en 1975 a 576 762 millones para 1979. El reajuste presupuestal implicó la restricción del gasto armamentista que realizaba el gobierno y que lo había llevado en 1976 a ser el país latinoamericano que más armas importó, 700 millones de dólares. Las reservas internacionales de la banca alcanzaron el año pasado un déficit de mil millones de dólares. La deuda pública pasó de 2 999 millones de dólares en 1975 a 8 300 en mayo del año pasado, calculándose que podría alcanzar para ese fin de año, los 11 000 millones de dólares. El crédito global que recibió el país en 1977 fue de 64 400 millones de soles para el sector público y 35 200 para el sector privado, en 1978 su distribución fue «más equilibrada», el primero recibió 66 000 millones de soles y el segundo 61 000 millones.

Es obvio que este problema financiero se refleja en una constante y cotidiana devaluación. Después de la primera devaluación en ocho años, ocurrida en 1975 cuando el cambio era de 48 soles por dólar, éstas han sido consecutivas, minidevaluaciones diarias que han lleva-

do a un cambio de 197 soles por dólar para principios del año de 1979, y se espera que llegue a 250 para el primer semestre.

Las medidas de la política económica de los militares desde el año de 1975 podrían resumirse de la siguiente manera: “devaluación del signo monetario, elevación y reordenamiento de las tasas de interés, eliminación de los subsidios, liberalización del sistema de precios, aliento a las exportaciones no tradicionales”,⁴ renegociación de la deuda, austeridad salarial, reasignación del presupuesto estatal.

Esta última fue una de las medidas a la que mayor atención se diera el año pasado y que se continúa dando en el presente año. Es así como se disminuyeron los gastos corrientes del Estado, básicamente en torno al reajuste de personal del Estado, 30 000 plazas desaparecieron, disminuyendo en 1% el gasto destinado a salarios y remuneraciones. El nuevo presupuesto, como dice Felipe Portocarrero muestra un precario saneamiento, plantea el mantener la contracción de los gastos corrientes y “[...] un déficit que es en términos reales más reducido, ya que representa el 25.2% de los gastos frente a una brecha fiscal que alcanzó el 42.3% de los egresos en 1977”.⁵

Sin embargo, el sentido claro del presupuesto nacional y del papel del Estado en la economía peruana, lo señala claramente el ministro de Economía al declarar que el presupuesto de la república “es el instrumento principal del gobierno, del Estado, pero no es el instrumento principal de la economía del país, porque hay otros factores importantes como son la dinámica empresarial y la inversión privada tanto interna como externa. Y en ese sentido, un presupuesto, en los aspectos de inversión, es necesario analizarlo *si va a generar a su vez demanda para las empresas, para el sector empresarial*, si va a ser un factor dinámico para la economía”.⁶

¿Y los trabajadores?*

La acumulación de capital había llevado, antes del estallido de la crisis, a una concentración acelerada. Mientras que en 1961 la quinta

⁴ Hugo Cabieses y Carlos Otero, *op. cit.*, p. 141.

⁵ Felipe Portocarrero, “Presupuesto 1979: precario saneamiento”, *Marka, actualidad y análisis*, número 104, enero 1979, p. 17.

⁶ Javier Silva Ruete, *op. cit.*, p. 8.

* Los datos que a continuación se presentan así como los anteriores han sido recogidos de las obras citadas, noticias periodísticas y de los presupuestos estatales de 1978 y 1979.

* Los datos que a continuación se presentan así como los anteriores han sido recogidos de las obras citadas, noticias periodísticas y de los presupuestos estatales de 1978 y 1979.

parte de la población, que tenía ingresos más altos recibía el 77% del ingreso nacional, en 1972 recibió el 79% y, el 1% de la PEA que en 1961 concentraba el 9.8% del ingreso personal nacional para 1972 concentraba el 17.9%.

La contraparte mostraba que en 1970, Perú tenía el 45% de su población con ingresos menores al mínimo necesario, ocupando en la clasificación de las Naciones Unidas el segundo lugar de los países de América Latina que tenía una mayor población en condiciones de «extrema pobreza».

Evidentemente esta situación se ha agudizado con la crisis. Mientras las ganancias de las empresas pasaron de 1968 a 1977 de 27 mil millones a 66 mil millones de soles, un aumento del 144%, el salario real de los trabajadores con base en 1973 igual a 100, bajaba a 72.2% en 1977, a lo cual se agrega la pérdida del poder adquisitivo del año pasado provocada por una inflación del orden del 75%. A principios del año una revista norteamericana, *Andean Report*, señalaba que Perú tiene cerca de la mitad de su población económicamente activa con salarios menores al mínimo, el que a su vez es uno de los más bajos de América Latina, 41 dólares mensuales que se devalúan día tras día.

La desproporción y la desigualdad entre los ingresos se agudiza entre los trabajadores del Estado, sector en donde la corrupción reina incuestionablemente. De las seis grandes subdivisiones del personal estatal encontramos que mientras un trabajador del último grado tiene un aumento irrisorio de 1 000 soles, un funcionario del primer grado tiene uno de 8 000 soles, pues el presupuesto oficial establece que “[...] la Remuneración Básica Máxima será un múltiple de la Remuneración Básica Mínima y su proporción será fijada periódicamente, sin exceder en su relación el valor de 8 a 1”.⁷ A ello se suma toda una serie de ingresos extraordinarios, suplementarios, que hace que el abismo se agrande y mientras un trabajador del grado vi recibe un aumento de 24 soles, un funcionario del más alto nivel recibe uno de 19 906 soles.⁸

La inflación ha recaído principalmente en el alza de los alimentos, lo que ha dado lugar a ganancias aceleradas de las transnacionales que controlan la producción y los subsidios gubernamentales. Las ocho empresas mayores de la rama alimenticia controlan el 80% de la producción, entre las cuales destacan la *Carnation*, *Nestlé*, el gru-

⁷ *Ley del Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 1979*, Lima, 1979, p. 40.

⁸ *Marka, actualidad y análisis, op. cit.*, p. 17.

po *Nicolini* y *Bunge & Born*. Por otra parte el alza ha implicado que la dieta alimenticia del pueblo peruano se vea mermada drásticamente. “El signo más dramático de lo que ha sido la miseria entre los pobres de Lima este año fue la noticia de la difusión del consumo humano de alimentos para engorde de animales. Productos como ‘nicovita’ o ‘purina’ han ingresado a la dieta de una población desesperada, cuyos ingresos reales —bajísimos ya en 1977— se han visto reducidos a mucho menos de la mitad en el presente año”.⁹

La recesión ha aumentado el desempleo y la migración es creciente. Oficialmente, el Estado acepta que el 10% de la población económicamente activa no tiene trabajo. A esto se le agrega la política económica que significa el reajuste de plazas y la respuesta al paro de los trabajadores que protestaron contra el alza de la vida, que significó el despido de miles de trabajadores y un decreto de ley que eliminó los derechos a la estabilidad en el trabajo.

Si 1978 fue para los trabajadores peruanos un año de acelerado empobrecimiento de su salario real, un año de intensa lucha por contener las medidas económicas y políticas que hacen descansar sobre ellos los efectos de la crisis, este año, 1979, que se inició con una elevación del 20% en la gasolina, 23% en el arroz y con una política económica que sigue los mismos lineamientos de contención salarial, devaluación constante, reajuste del presupuesto estatal, etcétera, se presenta también como un año que amenaza más aún el nivel de vida de las masas. La crisis continúa con toda su secuela de explotación, desigualdad y miseria para los trabajadores.

⁹ *Ibid.*, p. 31.